

pública, de acción privada o de acción pública a instancia privada.⁷⁶ De conformidad con el artículo 59 del Código Penal vigente, que regula el instituto de la suspensión condicional de la pena, es facultad del juez⁷⁷ otorgar el beneficio de ejecución condicional cuando la pena impuesta en no rebase de tres años de prisión, para ello debe emitir una resolución fundamentada, indicando las razones por las que deniega o no la aplicación de la suspensión condicional de la pena. Para aprobar la aplicación de este beneficio a favor del imputado, se tiene que analizar el cumplimiento de condiciones objetivas y subjetivas, que la misma ley penal establece claramente. Los elementos objetivos que debe apreciar el juzgador con

⁷⁶ Al respecto la autora GARCIA AGUILAR expone lo siguiente: "El artículo 25 del C.P.P. fija las condiciones de procedibilidad del instituto, sin atender la naturaleza persecutoria del hecho delictivo, sea si es de acción si es pública perseguible a instancia privada, o si se trata de un delito de acción pública, como si se establece para efectos de definir la viabilidad de la conciliación. Al no existir esa discriminación se concluye que la suspensión es factible en todos ellos, siempre que la sanción permita el otorgamiento hipotético de la ejecución condicional o se trate de una exclusivamente no privativa de libertad." GARCÍA AGUILAR, Rosaura, "La Suspensión del Procedimiento a Prueba en el Proceso Penal", 1ª edición, Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A. San José, Costa Rica, 1998, pp. 54-55.-

⁷⁷ Al respecto las resoluciones No. 474 de las nueve horas y cincuenta minutos del 11 de noviembre de 1994 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; No. 485 de las nueve horas quince minutos del 5 de setiembre de 1996 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; No. 549 de las diez horas y cinco minutos del 20 de setiembre de 1996 del Tribunal Superior de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; No. 218 de las ocho horas y cincuenta minutos del 19 de abril 1996 del Tribunal Superior de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;-

relación al beneficiario de la medida alterna, Suspensión del Proceso a Prueba, son que se trate de un delincuente primario y que la pena impuesta no exceda tres años de prisión o que se penalice con extrañamiento. El término delincuente primario debe ser entendido como aquella persona que no presente condenas judiciales firmes constando en el Registro Judicial de Delincuentes, sea por delitos dolosos o culposos.⁷⁸ Para conceder le ejecución condicional, la sanción a imponer debe ser prisión o extrañamiento. La pena, cualquiera sea su tipo, sólo puede ser impuesta, de conformidad con el artículo 39 constitucional, en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad dada al imputado de defenderse y mediante la necesaria demostración de su culpabilidad.-

Además de los requisitos anteriores, el juez debe analizar aspectos subjetivos del imputado como son la personalidad, la vida anterior y terror a la comisión del ilícito (estudiará el arrepentimiento que muestra el encartado y su deseo de reparar el daño causado), con el objetivo de determinar que el sujeto se comportará adecuadamente sin necesidad de ejecutar la pena impuesta; así, el juzgador al evaluar las condiciones subjetivas del sujeto condenado, deberá solicitar un informe al Instituto de Criminología, quien por medio de los especialistas designados, determinará las

⁷⁸ Resolución No. 176 de las once horas y diez minutos del 7 de marzo de 1997 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.-

posibilidades que existen para que el privado de libertad se rehabilite.-

Estos elementos, objetivos y subjetivos, tienen que ser analizados en la resolución que otorgue o no la suspensión condicional de la pena, porque si bien es una facultad del juez decretar o no este beneficio, la denegatoria o aceptación no debe ser arbitraria, sino que la autoridad judicial tiene la obligación de emitir una sentencia clara y fundamentada. En el supuesto de que se le otorgue el beneficio, se le hará saber al condenado que durante un plazo establecido no puede cometer un nuevo delito doloso sancionado con pena de prisión que exceda de seis meses, además que debe cumplir las condiciones que le han sido impuestas; de lo contrario, le será revocado el beneficio.-

B.2.2.- Delitos sancionados con pena no privativa de libertad:

Mediante la reforma introducida al Código Procesal Penal, a través de la Ley N° 7728, publicada en el periódico oficial La Gaceta No. 249, Alcance 61-A del veintiséis de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho, se agrega al artículo 25, un párrafo final, con lo que se permite aplicar la Suspensión del Procedimiento a Prueba en los asuntos cuya pena es exclusivamente no privativa de libertad. De conformidad con el artículo 50 del Código Penal, las penas no privativas de libertad son: el extrañamiento, la multa, la inhabilitación absoluta y la

inhabilitación relativa. Por tanto, en cualquier caso cuya sanción sea alguna de las anteriormente citadas, es posible aplicar la medida alternativa. Con base en lo anterior, hay que tomar en consideración que existen penalidades mixtas, es decir, que combinan penas privativas de libertad y las no privativas de libertad, en las que no sería posible aplicar la Suspensión del Procedimiento a Prueba. Si el ilícito es sancionado con pena no privativa de libertad, el artículo 25 del código Procesal Penal indica que procede la aplicación de la medida alterna en estudio, siempre que concurren los demás elementos, es decir, debe cumplir con los requisitos de aceptación de los hechos y el planteamiento de las reglas y plan reparador a cumplir, obviando lo relativo al obviando el beneficio de ejecución condicional de la pena.-

Es importante mencionar que no siempre resulta conveniente la aplicación la Suspensión del Proceso a Prueba en delitos que no impliquen pena de prisión o extrañamiento, porque aceptar cumplir, durante un plazo de tiempo determinado, -no inferior a 2 años ni mayor a 5 años- una serie de condiciones, es más gravoso para el imputado, a cambio, por ejemplo, de pagar la multa. En todo caso, queda a consideración del imputado, su defensor, el representante del Ministerio Público y el Juez buscar la respuesta adecuada al conflicto.-

B.2.3.- Admisión de hechos:⁷⁹

El ordinal 25 anteriormente citado en su párrafo cuarto, establece como condición indispensable para que se apruebe la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, que el imputado admita el hecho delictivo que se le atribuye; no ocurriendo lo mismo con las personas menores de edad acusadas,⁸⁰ a quienes el legislador, por su especial condición, no les exigió tal requisito,⁸¹ eliminando así la discusión en torno al

⁷⁹ Debe entenderse por admisión de los hechos la aceptación o afirmación de los hechos acusados, los cuales deberán serle informados de manera inmediata y comprensible, por parte del representante del Ministerio Público o bien por un juez, según sea la etapa procesal en la que se solicite su aplicación.-

⁸⁰ Al respecto la Lic. Rosaura García Aguilar ha expresado lo siguiente: "... En virtud de dicha falta de estipulación expresa en lo que concierne a la aceptación de los cargos podrían plantearse dos hipótesis. La primera consistente en que al regir la legislación procesal penal supletoriamente sería indispensable la integración normativa, mientras que la segunda atendería a la inaplicabilidad del CPP ante la especial forma de regulación del instituto en esta sede. Se considera que la última opción es la acertada, ... ello no obedece a una omisión de la ley especial que deba ser suplida, ni a un problema interpretativo del beneficio, sino a una forma particular de tutela, por lo que la utilización supletoria de la normativa procesal de adultos resulta incompatible en este extremo. ..., podría estimarse que la no exigencia en esta normativa de la aceptación de los cargos por parte del transgresor, antes que procurar evitar una colisión con el derecho de no declaración en contra de sí mismo ya mencionado, pareciera buscar una medida de mayor protección al menor infractor en su condición dicha. ...". GARCÍA AGUILAR, Rosaura. "Aceptación de los cargos y decisión jurisdiccional en la Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal juvenil.", En: Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 11, N° 16, mayo, 1999, pp. 80 a 82.-

⁸¹ De conformidad con una consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal Superior Penal Juvenil, la Sala Constitucional de la Corte

tema que se ha planteado en materia penal de adultos, porque para unos autores la aceptación de los hechos viola la garantía constitucional del artículo 36,⁸² según la cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo, mientras que otros consideran la aceptación de los hechos como un simple requisito a cumplir.-⁸³

Lo cierto de este requisito es que la Sala Constitucional estableció que el mismo no era inconstitucional, mencionando en importancia:

Suprema de Justicia emitió el voto No. 6857-98, ya mencionado y la sentencia No. 6948-98 de las dieciséis horas con cuatro minutos del veintinueve de setiembre de 1998, donde hace referencia a que no es necesario que el menor acepte los hechos, literalmente dice: "(...) ha de aclararse que si bien, el menor debe manifestar libremente su voluntad para ser sometido a la suspensión del proceso a prueba; no es necesario que acepte su culpabilidad en los hechos, pues conforme se indicó, la medida no se impone como consecuencia de un reproche por los hechos cometidos, sino como una medida cautelar, que si es cumplida adecuadamente tiene la virtud de extinguir la acción penal.- ...".-

⁸² Esa argumentación la sustentan: RIVERO SÁNCHEZ, Juan M., "¿Penalización del Derecho Civil o Civilización del Derecho Penal?, En: "Nuevo Proceso Penal y Constitución", Ibid., p. 526.-

⁸³ Tal posición es la que defienden autores como DE OLAZÁBAL, Julio "La Suspensión del Proceso a Prueba. Análisis de la ley 24.316 ("Probation")", Ibid., p. 39; CHINCHILLA CALDERON, Rosaura, "Proceso Penal Abreviado y Derecho a la Constitución. Análisis del instituto a la luz de la jurisprudencia constitucional", En: Revista Asociación de Ciencias Penales de Costa N° 14, Año 9, diciembre, San José, 1997, pp. 99-100; MAIER, Julio, "Derecho Procesal Penal", Tomo I, 2ª edición, Editores del Puerto, S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1996, p. 345; BOVINO, Alberto citado por LLOBET RODRÍGUEZ en "Proceso Penal Comentado. Código Procesal Penal", Ibid., p. 96; HOUED, Mario. "La Suspensión del Proceso a Prueba", Ibid., pp. 153-154.-

“...Claro está que el imputado tiene que reconocer la comisión del ilícito si desea acogerse a la suspensión del proceso a prueba, pero se trata para él de una trámite opcional, adicional y prescindible del proceso penal, diferente de las bases constitucionales que conforman este último y necesario solamente para fundamentar las circunstancias en que el juez acuerda la suspensión y sus consecuencias.- Es más bien -claramente- una creación legislativa que no atañe al ejercicio de los derechos fundamentales del imputado y, en concreto, del fijado en el artículo 36 constitucional por el que puede abstenerse de declarar en el proceso en su contra sin daño alguno.-

...”⁸⁴

Por la vigencia de la admisión de hechos en la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal de adultos, debe considerarse que aquella debe ser simple, voluntaria, inteligente, formal y expresa, con el fin de no violentar algún derecho o garantía del imputado.-

⁸⁴ Voto N° 2404-1998 de las 18:18 hrs. del día primero de abril del año mil novecientos noventa y ocho, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.-

B.2.4.- Plan de reparación y condiciones a cumplir por el imputado:

Uno de los requisitos que debe reunir la solicitud de aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba es el plan de reparación del daño ocasionado por el hecho ilícito. Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal refleja las nuevas tendencias que permiten mayor participación de la víctima en la solución del conflicto de manera más eficaz y rápida. Para lograr un plan de restauración acorde con el delito cometido, el daño ocasionado y las posibilidades de todas las partes, el artículo 25, párrafo segundo, del Código Procesal Penal, permite que ese proyecto consista en una conciliación la víctima, o en una reparación natural o simbólica del daño –moral, corporal, material-.

Sobre la conciliación podría decirse que ésta consiste en un acuerdo entre imputado y víctima mediante esas partes deciden resolver su conflicto de forma autocompositiva, donde por lo general cada una de las partes cede alguna porción de lo solicitado, debiendo el Juzgador y las partes deben acatar las reglas que sobre conciliación establece el artículo 36 del Código Procesal Penal.-

Con respecto a la reparación natural, puede expresarse que ésta consiste en la restitución de las cosas al estado anterior al hecho delictivo que generó el conflicto, y por ello opera cuando el daño es

material propiamente, es decir, el que se produce sobre el patrimonio de la persona afectada, debiendo señalarse que si este tipo de restauración no es posible, exigirla sería quebrantar el principio de igualdad.-

Sobre la reparación simbólica debe mencionarse que puede ser utilizada por el imputado cuando es imposible restituir la cosa al estado anterior a la comisión del hecho, y podría entonces, consistir en una indemnización, acorde con la naturaleza del daño causado y con las posibilidades de cumplimiento por parte del aquél, en la forma y en el plazo prescrito, caso contrario podría estarse en presencia de un incumplimiento que ocasionaría la reanudación del proceso.-

Además del plan reparador, el imputado debe cumplir una o algunas condiciones establecidas en el artículo 26 del Código Procesal Penal, lista que no puede considerarse como taxativa, sino que puede ser adaptada por el Juez de acuerdo a las condiciones del probando, e incluso de la propia víctima que pueda resultar involucrada en el cumplimiento efectivo de las condiciones, como de manera expresa el articulado mencionado prevé. No merecerá explicación en este trabajo de investigación cada una de las condiciones establecidas en el numeral 26 citado,-cuales son: a) Residir en un lugar determinado, b) Frecuentar determinados lugares o personas, c) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas, d) Participar en programas

especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos, e) Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el tribunal, f) Prestar servicios o labores en favor del Estado o instituciones de bien público, g) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario, h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia, i) Someterse a la vigilancia que determine el tribunal, l) No poseer o portar armas, k) No conducir vehículos. Solamente merece mención el hecho de que en materia penal juvenil el numeral 89 establece que el Juez Penal Juvenil, podrá decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en la ley, concretamente en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, las cuales en sus fines presentan similitudes con las condiciones transcritas que contiene el artículo 26 citado, por ejemplo en la primera normativa se establece instalarse en un lugar determinado o cambiarse de él, abandonar el trato con determinadas personas, eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión, matricularse en un centro educativo o en otra institución donde se les enseñe una profesión u oficio, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o alguna droga, internar a un menor en un centro para desintoxicarlo o eliminar su adicción a drogas; con las que se pretende básicamente

la reinserción de la persona menor de edad a su familia y a la sociedad, y por ello el Juzgador tendría la potestad de decretar alguna de esas órdenes, previo conocimiento del menor y, siguiendo la misma línea de pensamiento de protección integral y del interés superior del niño, éste en forma expresa y voluntaria deberá aceptarlo.-

B.2.5.- Audiencia que debe ser dada al Ministerio Público y a la víctima de domicilio conocido sobre la solicitud de aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba:

Este requisito, igualmente no está contemplado de manera expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil, y tal vacío puede considerarse no justo, e incluso un criterio discriminatorio como ser expone a continuación, y es por ello que en aras de no afectar los derechos de la víctima,⁸⁵ básicamente el de encontrar reparación por los daños ocasionados y obtener una justicia pronta y cumplida,⁸⁶ así como participar en la solución armónica del conflicto, el Juez Penal Juvenil al momento de tener conocimiento de la solicitud que hace el imputado o alguna otra parte, podrá de dar audiencia a la persona afectada para que se pronuncie al respecto; sin embargo, tal opinión no debiese considerarse como vinculante – obligatoria- para el juzgador, ya que ello iría en contra

⁸⁵ Sobre la condición de víctima y sus derechos y obligaciones* en el proceso penal patrio, debe remitirse entre otros a los artículos 7, 70, 71, 16, 17, 18, 19, 25, 37 del Código Procesal Penal.-

⁸⁶ Véase artículo 41 de la Constitución Política.-

del principio establecido en el artículo 19 de la Ley primeramente citada, por desfavorecerse a la persona menor de edad, sobre todo cuando no hay normativa expresa en la ley especial, la cual debe privar sobre la general. Lo anterior, posiblemente constituya un obstáculo para que la víctima logre un resarcimiento por los daños sufridos, -obstáculo que ya la misma Ley de Justicia Penal Juvenil prevé al remitir para el cobro de posibles daños y perjuicios a otra vía distinta a la penal, según artículo 55-, pero será en última instancia el Juez Penal Juvenil el que deberá ponderar la procedencia o no de la aplicación de la medida alterna solicitada, y dentro de la fundamentación de la respectiva resolución, podría acoger los alegatos a favor o en contra exteriorizados por la persona ofendida.-

B.2.6.- Supuestos donde no procede aplicar la Suspensión del Proceso a Prueba:

Este presupuesto también fue introducido mediante reforma, concretamente con la Ley N° 8146, publicada en el periódico oficial La Gaceta No. 227, del veintiséis de noviembre del año dos mil uno, la cual agrega al artículo 25, una mención sobre el no beneficio que debe cubrir al imputado solicitante de la Suspensión del Proceso a Prueba, si en el plazo de cinco años antes, se aplicó una medida igual o bien se dio la extinción de la acción penal mediante la

aplicación de la reparación integral del daño.⁸⁷ Con este requisito se pretende evitar que dicha medida alternativa sea utilizada de manera indiscriminada por los imputados, porque debe siempre pretender el aplicador del Derecho buscar hacer efectivo el principio de justicia y seguridad jurídica.-

Sobre tal aspecto es necesario citar que si a un imputado se le aplicó la Suspensión del Proceso a Prueba, durante el plazo de los cinco años anteriores, pero la misma le fue revocada, no podrá ésta considerarse, porque en aplicación del principio de interpretación favorable, solamente la suspensión del proceso a prueba o la reparación integral del daño que haya extinguido la acción penal sería un impedimento para su solicitud y aplicación.-

⁸⁷ Sobre la medida alternativa de reparación integral del daño, consúltase el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal, única norma que contempla el instituto en la legislación patria.-

Sección Segunda:

Aplicación del instituto de Suspensión del Proceso a Prueba en materia Penal Juvenil

El instituto de la suspensión del proceso a prueba aplicado a las personas menores de edad, como anteriormente se ha mencionado, está sujeto a una serie de presupuestos diferentes a los establecidos con respecto a las personas adultas, ello debido a la condición especial que aquellos poseen, y sobre todo en aplicación de los principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la cual busca en primer orden una protección integral de los menores y su reinserción a la sociedad y a la familia, entre otros, y sobre todo en aplicación del principio educativo,⁸⁸ fines que pueden ser logrados a través de esta medida alterna, la cual pretende insertar al menor de edad en una nueva forma de vida, porque las posibles condiciones a imponer, durante un período de tiempo determinado, conminan a aquél a hacer, no hacer u omitir determinados comportamientos que estaban siendo parte de su cotidiano actuar, y si bien aquellas condiciones se convierten en una obligación desde el momento en que el menor acepta sujetarse a ello, ante la presencia de un

⁸⁸ Al respecto los artículos 7, 8, 44 y 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y los artículos 1, 5, 7, 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia.-

Juez,⁸⁹ Defensor y Fiscal, tal vínculo no sujeta al menor a cumplir efectivamente lo pactado, de ahí la importancia de la existencia de una convicción por parte del probando, porque su incumplimiento, debidamente comprobado y no justificado por el menor de edad, obliga a la autoridad jurisdiccional a reanudar el proceso hasta el dictado de la sentencia.-

En esta sección es pertinente hacer referencia a los pasos a seguir cuando el Juez Penal Juvenil aprueba la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, aprobación que debe plasmarse en una resolución que cumpla requisitos de forma y fondo mínimos, para posteriormente ser puesta en conocimiento del menor de edad, defensor y fiscal, y demás partes apersonadas al proceso que hayan señalado lugar o medio para recibir notificaciones, siendo que los participantes directos tendrán la posibilidad de plantear recurso contra dicha resolución, y en caso contrario, deberá el menor someterse al cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones impuestas, el cual será vigilado por un órgano encargado de ello, a quien le corresponderá informar al Juez Penal correspondiente cómo se desarrolla el proceso de prueba, y si el mismo no es

⁸⁹ El artículo 29 en su inciso f) de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que será una función del Juzgado Penal Juvenil aprobar la suspensión de procedimientos, siempre que se cumpla con los requisitos fijados por la ley. Así tal función está reconocida en el artículo 111 inciso 4 de la Ley de Reorganización Judicial N° 7333, publicada en el Alcance N° 24, Periódico Oficial La Gaceta N° 124 del primero de julio del año 1993, numeral modificado mediante la Ley N° 7728 del quince de diciembre del año 1997, denominada Ley de Reorganización Judicial.-

satisfactorio, necesariamente deberá darse audiencia a las partes antes mencionadas, para que una vez determinado el incumplimiento injustificado se reanude el proceso o bien, se tomen las medidas necesarias para satisfacer las condiciones impuestas.-

A.- Aprobación, vigilancia, cumplimiento e incumplimiento de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal juvenil:

Para que un Juez Penal Juvenil pueda aprobar la Suspensión del Proceso a Prueba debe haberse solicitado su aplicación por las partes legitimadas para ello, como anteriormente se citó, y aquella debe cumplir una serie de requisitos mínimos. Pero también el Juez Penal Juvenil podrá no aprobar la solicitud, denegación que necesariamente debe fundamentar, porque hay que establecer en este sentido que el beneficiarse de la Suspensión del Proceso a Prueba no es un derecho fundamental que posee el menor de edad —ni el mayor de edad—, sino que su implementación en la Ley de Justicia Penal Juvenil es una decisión del legislador de índole político criminal⁹⁰ y por ello la necesidad de establecer una serie de requisitos y luego de fundamentarse debidamente su aprobación o no.-

⁹⁰ Véase resolución N° 1294-1999 de las nueve horas con veintiocho minutos del día quince de octubre del año mil novecientos noventa y nueve emitida por la Sala Tercera.-

Si bien es cierto el Juez Penal Juvenil aprueba la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, la vigilancia de su cumplimiento no formará parte de sus labores, en primera instancia, lo que no obsta a que la autoridad jurisdiccional solicite informes a las partes o bien al Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, última que será el órgano encargado de informar periódicamente al Despacho Judicial sobre el cumplimiento o no de las condiciones aprobadas, vigilancia que traerá aparejado necesariamente el análisis debido para archivar la causa o reanudar el proceso, dependiendo de la actividad desplegada por el menor de edad.-

A.1.- Denegatoria de la solicitud de aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal juvenil:

Conforme lo expresado anteriormente, en el momento en que se solicita la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, el Juez Penal encargado, deberá de analizar detenidamente la petición, para así decidir si aprueba o no la misma. Para denegar la solicitud debe existir una debida fundamentación de la misma, conforme lo exige el artículo 142 del Código Procesal Penal, caso contrario, podrían las partes recurrirla, porque las partes tienen derecho de conocer los razonamientos que sustentan aquella y el juzgador el deber de motivarla.-

Así, la solicitud de Suspensión del Proceso a Prueba puede ser rechazada por el Juzgador, en primera instancia, porque este instituto alternativo no constituye un derecho fundamental que protege al menor de edad, y por ende que debiesen todas las partes involucradas respetar y hacer cumplir en todo momento en un proceso jurisdiccional o de cualquier otra índole, sino que es un instrumento procesal que ha establecido el legislador como decisión político criminal, al considerar que la misma puede contribuir a la realización de los principios que rigen un proceso penal determinado, y ese sentido fue el adoptado por nuestros legisladores y autoridades ejecutivas competentes al momento de poner en vigencia la Ley de Justicia Penal Juvenil. Ese ha sido el fundamento que ha dado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al expresar:

“... En primer término, conviene señalar que la suspensión del proceso a prueba, al igual que las restantes medidas alternativas que contempla el Código de rito, no constituyen un derecho fundamental del acusado, aplicables con solo que este exprese su voluntad de someterse a ellas. Al contrario, obedecen a decisiones del legislador de índole político criminal y de allí que se establezcan diversos requisitos para su procedencia. ... Lo expuesto no significa, claro está, que si concurren los presupuestos legales exigidos para aplicar la solución alterna,

puedan los jueces rechazar la gestión de manera infundada o con motivaciones arbitrarias. Sin embargo, sí se encuentra dentro de sus deberes examinar, en el supuesto de la suspensión del proceso a prueba, si las condiciones a las que el justiciable propone someterse resultan acordes con la naturaleza de los hechos investigados y del bien jurídico que protege el tipo penal concreto, la gravedad de la lesión causada a aquel, la posible disparidad entre los intereses válidamente tutelables de la víctima, cuando se los relaciona con los del acusado, así como otras circunstancias que permitan establecer que la medida alterna resulta el modo deseable y eficaz de resolver el conflicto y restablecer la paz, el orden y el equilibrio sociales quebrantado por el hecho o si, por el contrario, constituiría un simple mecanismo para evitar la pena, pero que no satisfaría ninguno de los restantes efectos que persigue, desde el punto de vista político criminal, el establecimiento legislativo de tales institutos. Desde esta perspectiva, aun en el supuesto de que el delito atribuido al justiciable admita la ejecución condicional de la pena, no existe obstáculo legal alguno para que el Tribunal rechace la propuesta si considera que las condiciones

que se ofrece cumplir, o incluso otras que pudiesen ser impuestas, generarían resultados contrarios a los principios que inspiran la suspensión del proceso a prueba y a los efectos que pretende obtener. Esta Sala, en su voto 796-98, de 10,30 hrs. de 21 de agosto de 1998 "... Conviene reiterar que nunca deben perderse de vista los objetivos político criminales que se proponen las medidas alternas, los cuales no se restringen al único fin de evitar la persecución penal y la eventual pena -como parece entenderlo la impugnante-, pues de ser así, carecería de sentido la posibilidad expresa, prevista en el párrafo sétimo del artículo 25 del Código de rito, de que el Tribunal no admita la solicitud del imputado, al igual que el requisito de escuchar al acusador y a la víctima. Precisamente lo que se infiere de la norma, en cuanto establece tales procedimientos, es la necesidad de ponderar el caso concreto, los intereses y bienes jurídicos que se hallan en pugna -la libertad del justiciable, su previsible conducta futura adecuada al orden jurídico, sin que requiera purgar una pena de prisión; el derecho constitucional de la víctima de acceder a una Justicia pronta y cumplida; el interés del Estado de asegurar y restablecer la paz social y la

observancia de los preceptos que pretenden garantizarla-, así como la capacidad de la medida de ofrecer una solución satisfactoria del conflicto surgido a raíz del delito. Tampoco se trata de introducir meros criterios discrecionales o que, de algún modo, escapen al control impugnatorio, pues los juzgadores se encuentran siempre sometidos al principio de legalidad. Sin embargo, este principio solo puede respetarse cuando las decisiones no contraríen otros del mismo jurídico más riguroso del caso sometido a su conocimiento, en su tarea de asegurar la interdicción de la arbitrariedad y de valorar si la medida alterna -aun contraria a los deseos manifiestos de las partes, excluido, por supuesto, el imputado- es, sin embargo, capaz de cumplir con los objetivos y principios que la rango constitucional -como los ya citados- y se fundamenten de una manera que permita su revisión ciudadana y judicial. ... Por supuesto, la simple negativa del acusador y de la víctima no resulta vinculante para decidir, pero ello no significa otra cosa sino que los juzgadores deberán esforzarse para realizar un examen ley le asigna.

... „91

⁹¹ Ibid.-

En la resolución transcrita se denota que el Juzgador debe considerar siempre el caso concreto, si las condiciones propuestas buscan la solución armónica del conflicto, si son condiciones legalmente permitidas, posibles de cumplir por la persona menor de edad, tomando en cuenta sus habilidades, aptitudes, limitaciones físicas e intelectuales, sus actividades cotidianas, sus recursos económicos, su permanencia en una familia o a cargo de una institución estatal que lo custodie, e incluso si hay factores externos que condicionen su cumplimiento y si podrían éstos eliminarse o disminuirse.

Las anteriores consideraciones deben darse por cuanto, debe recordarse, que el menor de edad quien ayudado de su Defensor, y/o Fiscal, de sus padres de familia, guardadores o tutores o bien de representantes del Patronato Nacional de la Infancia,⁹² es el que propone una serie de condiciones prescritas en la ley, o incluso podría suceder el caso de que alguna o algunas órdenes de orientación y supervisión se formulen especialmente para el caso concreto, y es ahí cuando el Juez Penal Juvenil debe ponderar las mismas sobre los principios rectores del proceso penal juvenil, los cuales con la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba no buscan más que la reinserción del menor a la sociedad y a la familia, y el restablecimiento de la paz

⁹² Sobre este aspecto debe recalcar la importancia y la necesidad de que al menos las partes indispensables en el proceso penal juvenil, sea Fiscal, Defensor y Juzgador, sean especialistas en materia de menores, conforme lo procura el numeral 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.-